

Los efectos de la reforma electoral de 2014 en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) 2012-2018

Autor: Karla Victoria Vélez Barba, Lic. En Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guadalajara, karla.velez5119@alumnos.udg.mx

Introducción

El reformismo dentro de la legislación electoral es una constante en la historia reciente de nuestro país, lo cual ha provocado profundas implicaciones para la propia configuración democrática. Parte importante del debate en torno a dichas reformas se ha visto inmerso en el rol de la autoridad electoral desde un nivel subnacional, y como su actuar debería disponer de cierta autonomía o por el contrario, desaparecer dicha figura y optar por una única rectoría nacional.

De forma particular, la reforma electoral 2014 surge de la nueva llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia mexicana en el siglo XXI, mostrando varios cambios trascendentales en la planeación democrática y la gestión electoral del país y, que pueden verse resumidos a través de la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y el surgimiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Un punto de controversia dentro de esta transformación han sido las nuevas atribuciones para el rubro de las elecciones locales, ocasionando repercusiones directas en la labor de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todas las entidades federativas del país.

El presente trabajo busca preguntarse, mediante un caso específico, ¿cuáles han sido los efectos de la reforma electoral de 2014 en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), durante el período 2012-2018?. Con ello, se pretende describir su papel como actor en la vida político-electoral de la entidad, su relación con el sistema político jalisciense y su labor en materia electoral, obteniendo dicha información mediante una serie de entrevistas semiestructuradas hacia actores clave, relacionados laboralmente con este Instituto. Esto es realizado con el objetivo de observar la percepción interna sobre la autoridad electoral jalisciense en dicho período.

Conceptos básicos

Para familiarizarse de mejor manera con la temática desarrollada y -a su vez- delimitando lo planteado por este texto, se presentan algunos conceptos que funcionan como contextualizadores para el ámbito electoral, los cuales son: legislación electoral, reforma electoral, gestión electoral y organismo electoral autónomo.

Legislación electoral

Las leyes son elementos fundamentales para el desarrollo de carácter democrático, pues otorgan limitaciones hacia todos los actores sociales, por lo que la esfera electoral no está exenta de dichas regulaciones. Romero Ballivián (2017) entiende por legislación electoral al conjunto de normas cuyo propósito es fijar y desarrollar los principios, aspectos sustantivos, procedimentales, organizativos y jurisdiccionales de la propia materia electoral.

Por su parte, Brenes (2013) desarrolla el concepto desde dos sentidos distintos: estricto y amplio. Desde el sentido estricto, la legislación electoral hace referencia a cualquier ley cuyo objeto principal sea de naturaleza electoral aprobada desde el poder Legislativo. Por otro lado, desde un sentido amplio, las leyes electorales comprenden las disposiciones reglamentarias emitidas por el organismo electoral encargado para desarrollar y precisar la legislación y así facilitar su aplicación en los procesos electorales (Brenes, 2013). Puntualizando, el desarrollo de este texto comprenderá este concepto desde el sentido amplio, puesto que centra su atención en las disposiciones derivadas desde un organismo electoral.

Reforma Electoral

Las instituciones dentro de cualquier régimen democrático mantienen un cambio frecuente que conlleva a la transformación política. Dichas reformas constituyen ejercicios de diseño institucional, con cambios de legislación y normas institucionales específicas (Lijphart y Waisman, 1996). Esto se funda a partir de una percepción compartida por actores políticos de alguna disfuncionalidad o incompatibilidad con las instituciones precedentes. Sin embargo, nunca hay una sola alternativa para resolverla (Negretto, 2010). El reformismo busca un cambio de *status* en el régimen, con base no solo en la negociación política de los intereses de los actores involucrados, sino también en la compleja interacción entre la diversidad de reglas formales, prácticas políticas informales y factores no institucionales (Negretto, 2010).

Para la esfera electoral, se entiende por reforma a aquella que transforma las instituciones y las reglas electorales que rigen los procesos democráticos (Secretaría de Gobernación, 2014).

Gestión Electoral

Los procedimientos electorales se han conformado como un elemento central de los sistemas democráticos, por lo que el concepto de gestión electoral surge de forma crucial. Con ello, se busca generar una eficiente gestión, que tenga la capacidad de definir de forma limpia y clara a los ganadores y perdedores de un proceso electoral, siendo esta una condición *sine qua non* para definir a un régimen como democrático (Barrientos del Monte, 2012).

Para este texto, el concepto será entendido como aquella gestión que abarca todos los elementos institucionales que involucran las funciones de administración, control y justicia de procesos electorales y de mecanismos de democracia directa, esto mediante tres elementos: leyes y normas, los procedimientos y los organismos electorales (Barrientos del Monte, 2011).

Organismo Electoral Autónomo

La administración electoral *per se* no pondera un modelo de gestión particular, por lo que la observación de la coyuntura latinoamericana resulta ser la pieza clave para entender el paradigma de los organismos electorales autónomos en la región. Dicho diseño tiene raíces en los procesos de transición hacia la democracia en el siglo XX (Krennerich, 1998). Las dictaduras caudillistas constituyeron la regla más que la excepción, por lo que las elecciones carecían de importancia política y estaban desprovistas de cualquier función democrática (Krennerich, 1998). El legado autoritario dejó huella no solo en el espectro social, sino también en la configuración de sus instituciones. Los organismos electorales en América Latina se han encontrado bajo la premisa de que la credibilidad de la democracia dependen en buena medida de su labor (Jaramillo, 1998). En consecuencia, se configuraron organismos electorales de carácter autónomo, independientes de los tres poderes del Estado.

A diferencia de otros países, en México se transitó a la democracia a partir de una serie de reformas que pudieron gestionar de manera independiente y autónoma los procesos electorales, dado a que el jugador autoritario no era el ejército, sino un partido, el PRI (Barrientos del Monte, 2020). A pesar de ello, la autoridad electoral siguió una configuración bajo autonomía.

Sobrado González (2008) apunta que un organismo electoral autónomo es aquel permanente y especializado, que gestiona autónomamente la función electoral, tratándose de órganos constitucionales que derivan de la Carta Magna el fundamento de su independencia orgánica.

Marco histórico

Las características que han conformado a la región latinoamericana y al propio caso mexicano han influido de forma significativa en la conformación de la esfera electoral, por lo que compete abordar una breve revisión.

Los organismos electorales en Latinoamérica

Para la región, la gestión electoral se ha desarrollado de la mano de organismos autónomos, debido a que el contexto político se consolidó con base en una herencia autoritaria que dejó huella no sólo en el imaginario colectivo, sino también en la configuración institucional. Para Morlino (2007) la herencia autoritaria es definida como aquellos modelos de comportamiento, reglas, relaciones, situaciones políticas y sociales, aunadas a normas y procedimientos institucionales que han sido introducidos y/o reforzados por un régimen de tipo autoritario. Dicha herencia autoritaria resultó en un paradigma no ajeno a los organismos electorales, por lo que esto se vió reflejado en su estructuración.

Hoy en día, la gran mayoría de los países latinoamericanos -incluido México- poseen un órgano estatal autónomo encargado de las funciones electorales, encontrándose en un proceso de consolidación mediante el cual estos han pasado de ser materia de regulación constitucional, con carácter permanente. La tendencia latinoamericana es clara, los temores y la desconfianza creada por la herencia autoritaria son una pieza integral del aprendizaje político de estas naciones, por lo que la condición de autonomía y el amplio espectro de funciones por parte de los organismos electorales es el resultado de estos factores.

El federalismo electoral en México

La configuración de la gestión electoral en el país se desarrolló dentro de los arreglos institucionales derivados de la tipología de Estado de carácter federal, entendiéndose por federalismo al reparto del poder político entre instituciones que controlan ámbitos territoriales diferentes, esto con base en un acuerdo político (foedus) que permite la coordinación entre entidades soberanas (Vallés y Martí i Puig, 2015).

El federalismo electoral en México, desde 1824, no sólo surge y se desarrolla por consecuencia de la diversificación del sistema electoral y de las condiciones políticas enraizadas en las entidades federativas, sino también por la forma en cómo éstos se han relacionado con el gobierno del centro y con las propias directivas nacionales de los partidos (Peschard, 2008). La mecánica del federalismo electoral en el país no puede explicarse solamente a partir de las características políticas de cada entidad, sino de la manera en como éstas se enlazaron con el centro del país, que había sido la cúspide indiscutible de la pirámide durante la época de la hegemonía (Peschard, 2008).

La instauración de dicho federalismo tuvo implicaciones en el sistema electoral mexicano, pues se buscó que este – a través del esquema federal- respondiera a dos objetivos: la construcción de un sistema dual, que eligiera a las autoridades nacionales, y -en paralelo- a las subnacionales y la elección del gobierno nacional, pero con dos intenciones políticas explícitas, garantizar la adecuada representación de los estados como entidades políticas para promover y defender sus intereses y garantizar que las autoridades federales no invadan la autonomía de los estados (Barceló Rojas, 2015).

El reformismo electoral en México

Desde la configuración del Estado posrevolucionario, el poder político en México necesitó de un proceso que lo dotara de certidumbre, legalidad y legitimidad a través de la institucionalización, derivado de las convulsiones sufridas por las disputas caudillistas. Los ejércitos de los caudillos contendían por el poder a través de las armas y no en urnas. Hasta la promulgación de la Constitución de 1917, los ejércitos se sustituyen por partidos políticos (Torres, 2012), de los cuales, el único sobreviviente fue el entonces Partido Nacional Revolucionario (PNR)¹, transformado posteriormente en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) para 1938 y en 1946 nuevamente el partido oficialista cambia de nombre por Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¹ Constituido en marzo de 1929.

El tema electoral se mantuvo al margen del debate público derivado de que la consolidación del partido oficialista no respondió a una lógica de competencia democrática a nivel externo, sino que apostaba por la lucha interna de poder en el propio partido².

El sistema político mexicano surgió de rasgos políticos particulares: la desmilitarización de las fuerzas sociales, agrarias y militares, y una reforma política gestionada desde un sistema controlado por un partido hegemónico³ (López Villafañe, 2005). Con base en ello, la gestión electoral en el país cobró relevancia hasta entrado el siglo XX, iniciando una larga tradición de reformismo dentro de la materia en 1946, acompañado de un clima de violencia y represión derivado de la elección presidencial de 1940, aunado del creciente apoyo del bloque opositor del oficialismo. Esto impulsó la promulgación de la Ley Federal Electoral, la cual marcaba la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE), liderada por la Secretaría de Gobernación, en conjunto de la creación de Comisiones Electorales Locales (Senado de la República (México) (2018)).

De forma similar, para 1951, surge la llamada Ley Electoral Federal, la cual marca el surgimiento de la Comisión Federal Electoral, también dirigida por el Secretario de Gobernación y, a nivel local, se constituyen Comisiones Locales Electorales, integradas bajo designaciones directas de la Comisión Federal (Carmona Dávila, 2023).

En 1953, se realizó la reforma que dio apertura y reconocimiento hacia el sufragio femenino⁴ y el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, lo cual era buscado desde el Constituyente de 1917. Una década después -1963- surge otra reforma bajo un contexto subnacional marcado por la primera aparición del movimiento estudiantil en el estado de Guerrero, creando las primeras condiciones para realizar una reforma que pudiera dar cabida a una apertura gradual y controlada del régimen mediante el establecimiento de la figura de diputados de partido, integrando a ciertas minorías políticas en el Congreso. Esta apertura política controlada se considera el antecedente más lejano de la transición democrática en México, puesto que el priísmo canalizó electoralmente el descontento social y la disidencia sin arriesgar su predominio (Sánchez Maldonado, 2022).

² Se apostó por instituciones informales como el *dedazo*, imposición del próximo presidente por parte del Ejecutivo saliente (Langston, 2006).

³ Sartori (2005) lo define como: partido que no permite una competencia oficial por el poder, ni una competencia *de facto*; se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda.

⁴ Las mujeres mexicanas emiten su voto por primera vez hasta las elecciones de 1955, para la elección de diputados federales de la XLIII Legislatura.

Para 1968, con el crecimiento del movimiento estudiantil y la matanza de estudiantes perpetrada por el Estado mexicano el día 2 de octubre en Tlatelolco, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se vio oportuno generar una reforma en 1969, modificando la edad para acceder a la ciudadanía y al derecho al voto a los 18 años –previamente era a los 21 años-. De forma similar, se desarrolló la misma línea de actuación en el siguiente sexenio, con relación a la represión estatal, por lo que para 1971 sucedió una nueva matanza por parte de agentes paraestatales hacia estudiantes -el *Halconazo*-, y al igual que en 1968 se buscó revertir este hecho ante la percepción general mediante una reforma para 1972, en donde fueron modificados los derechos pasivos de los ciudadanos, reduciendo los requerimientos de edad para contender por una diputación o senaduría.

Estas reformas vislumbraron una lógica en las prácticas políticas del PRI del siglo XX, en donde la represión era seguida por la cooptación de sectores mediante la apertura de ciertos derechos.

Para 1977, se introdujo otra reforma, inserta en la presidencia de José López Portillo, tras un fuerte golpe hacia la percepción de la legitimidad de los procesos electorales en el país dado a que las elecciones de 1976 se caracterizaron por solo contender un único candidato presidencial oficialmente registrado. Esta reforma fue considerada como uno de los primeros intentos de liberalización⁵ en el país, pues fungió como respuesta para liberar la presión contenida en la vida pública, política e institucional. Esta constó de una reformulación en la asignación de curules en la Cámara de Diputados con el fin de ampliar el acceso a fuerzas políticas menores, además de dar apertura ideológica mediante el registro de partidos de ala izquierdista.

Nueve años después, se ponderó la siguiente reforma en la materia en 1986, inserta en la presidencia de Miguel de la Madrid, marcando una ampliación en el número de curules de representación proporcional para la Cámara de Diputados.

Tras ello, la coyuntura suscitada en las elección presidencial de 1988⁶ fue un detonante para realizar una nueva reforma, por lo que para 1990 se introdujo el Código

⁵Según mencionan O'Donnell y Schmitter (1991), por liberalización se comprende al proceso de redefinir y ampliar derechos, los cuales desencadenan una serie de consecuencias, pues dichos derechos buscan proteger de actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado y aunque nunca son respetados en su totalidad, su desplazamiento constituye una variante importante de las prácticas de los gobiernos autoritarios.

⁶ Resultó en un polémica jornada electoral, dado a que se presentó un fallo en el sistema de conteo de votos, dando como ganador a Carlos Salinas de Gortari, candidato presidencial por el PRI.

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en conjunto del surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), un órgano separado del gobierno dedicado específicamente a la realización de la materia electora, sustituyendo a la antigua Comisión Federal Electoral⁷, quien era la institución gubernamental encargada de organizar las elecciones (Vázquez Vázquez y Guzmán Robledo, 2017).

En 1993 se realiza una nueva reforma, la cual enfatizó la formulación de nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales. Sin embargo, tan solo un año después -1994-, sucesos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, provocaron nueva tensión en el sistema político, concretando una nueva reforma para el ámbito electoral, el fortalecimiento de la autoridad electoral y su ciudadanización, con la finalidad de otorgar mayor legitimidad al próximo proceso electoral en puerta. Se estableció que el IFE se dotaría como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, direccionado por consejeros ciudadanos; todo ello traducido como una autonomía más tangible (Vázquez Vázquez y Guzmán Robledo, 2017).

En 1996 surgió otra reforma en la materia, inserta en la presidencia de Ernesto Zedillo, la cual apostó por la tendencia hacia el fortalecimiento y autonomía del IFE, en donde se pondero que “sólo los miembros no partidistas del Consejo General -los Consejeros Electorales- mantuvieron voz y voto dentro del mismo, incluso sus facultades se ampliaron y por primera vez se establecieron comisiones especiales conducidas por dichos Consejeros” (Meixueiro Nájera y Pliego Moreno, 2010, p. 9). De igual forma, dicha reforma también reestructuró la jurisdicción electoral en función del fortalecimiento al IFE, dictando diversos ejes rectores que institutos electorales estatales debían acatar, aundo de diversos aspectos como la recomposición de la Cámara de Diputados y Senadores, la flexibilización del registro de partidos políticos y la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Esta reforma reforzó la autonomía del IFE al deslindarlo completamente del poder Ejecutivo, reservando el voto consejeros ciudadanos y dejando su designación a un Legislativo con exigencia de un acuerdo reforzado que aseguro el consenso suficiente (García Bartolo, 2011).

⁷ Creada a partir de 1951 y en función hasta 1988, era el organismo encargado de la organización de los comicios en el país.

En el 2000, la coyuntura mexicana sufrió un importante cambio con la llegada de la alternancia electoral a la presidencia de la república, pues el candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, ganaría los comicios. Se prevía que la llegada de un partido de oposición al poder significaría una consolidación democrática y con ello, una gestión electoral eficiente, sin embargo, esta premisa es desechada rápidamente en 2002, pues se incorporó una reforma electoral en materia de cuotas de género, marcando que no más del 70% de los candidatos podían ser del mismo género (Centro de Capacitación Judicial Electoral (México) (2010)).

Posteriormente, para 2005, se realiza otra reforma donde se incorpora a la legislación electoral el voto de mexicanos residentes en el extranjero, particularmente para la elección de presidencial (Centro de Capacitación Judicial Electoral (México) 2010)).

En 2007, durante el período presidencial de Felipe Calderón -perteneciente al PAN- surge otra reforma. Cabe resaltar que Calderón llega a la presidencia mediante nuevos señalamientos de fraude electoral, ocasionando que nuevamente se cuestionara el papel de la autoridad electoral a nivel local y nacional. En correspondencia, la reforma presentó modificaciones relevantes en el ámbito de fiscalización hacia partidos políticos y en la ampliación del encargo de los Consejeros Electorales, esto acatado de forma directa por los institutos de las entidades federativas, con el fin de homogeneizar con respecto al organismo federal, mostrando indicios de una tendencia centralizadora en la materia.

Tabla1. Reformas electorales en México 1946-2007.

Año	Contenido general
1946	Creación de la CFVE ⁸
1951	Creación de la CFE ⁹ y Comisiones Locales Electorales.
1953	Reconocimiento al voto femenino.
1963	Introducción de diputados de partido.
1969	Acceso a ciudadanía y voto a los 18 años.
1972	Reducción de edad para contender a senadurías y diputaciones.
1977	Introducción de diputados plurinominales/ tiempo aire/ financiamiento público.
1986	Ampliación de curules plurinominales para diputaciones.

⁸ Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

⁹ Comisión Federal Electoral.

1990	Introducción del COFIPE / surgimiento del IFE.
1993	Reformulación del financiamiento a partidos políticos.
1994	Autonomía del IFE/ciudadanización de Consejerías.
1996	Fortalecimiento del IFE/ incorporación del TEPJF ¹⁰ .
2002	Cuotas de género.
2005	Voto en el extranjero.
2007	Fiscalización/ ampliación del encargo de Consejerías/ homogeneización hacia organismos locales.

Elaboración propia con base en Carmona Dávila (2023), Centro de Capacitación Judicial Electoral (México) (2010), García Bartolo (2011), Meixueiro Nájera y Pliego Moreno (2010), Sánchez Maldonado (2022), Senado de la República (2018) y Vázquez Vázquez y Guzmán Robledo (2017).

La reforma de 2014 y sus efectos para el estado de Jalisco

En 2012, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto –perteneciente al PRI-, después de otra jornada electoral controversial, plantea el *Pacto por México*, una serie de acuerdos para la gobernabilidad, producto de negociaciones entre el propio PRI, el PAN y la corriente Nueva Izquierda del PRD¹¹. En cuanto al ámbito electoral, este grupo buscaba la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación homologada que se encargara tanto de las elecciones federales, como de las locales pero, con inmediatez encontró inconformidad en las entidades federativas y tribunales electorales estatales, por lo que se plantearon modificaciones a la propuesta (Vázquez Vázquez y Guzmán Robledo, 2017).

Con base en ello, el 10 de Febrero de 2014, se publica en el Diario Oficial de Federación las reformas a 30 artículos constitucionales¹² referidos a la planeación democrática del país; lo cual determinó la desaparición del IFE, para con ello crear el Instituto Nacional Electoral (INE) y de la mano nuevas reglas para la competencia y administración electoral en el país. La reforma incorporó a la legislación electoral a las candidaturas independientes, principios de paridad de género, la reelección para cargos legislativos y

¹⁰Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹¹ Partido de la Revolución Democrática.

¹² Los artículos son: 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122.

ayuntamientos, en conjunto de la ampliación de competencias de la autoridad electoral nacional, por lo cual el INE quedó facultado para dirigir y efectuar la capacitación electoral, establecer la geografía electoral, padrón de electores y observación electoral, fiscalizar partidos y candidatos, preparar las jornadas electorales, imprimir materiales electorales y declarar la validez y cómputo de los comicios, tanto a nivel federal como local (Vázquez Vázquez y Guzmán Robledo, 2017).

Cabe resaltar que dentro de las amplias facultades otorgadas al INE en la reforma de 2014 se encuentran la injerencia y autoridad frente a los Organismos Públicos Locales Electorales¹³ (OPLEs), observado mediante cuatro facultades en específico: 1) *asunción*¹⁴ de las actividades de la función electoral que corresponden a los OPLEs, 2) *atracción*¹⁵ de asuntos de competencia local, 3) *delegación* de las atribuciones relacionadas con la organización electoral (Barrientos del Monte, 2020) y 4) *designación y remoción* de los integrantes del órgano superior de dirección de los OPLEs, sin la posibilidad de reelegirse.

Los OPLEs se constituyeron como autoridad local en la materia electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones (Canal del Congreso (México) (2018)). Son encargados de la educación cívica, escrutinio, cómputo y constancia de elecciones locales¹⁶ pero, dejando la posibilidad de que el INE pueda asumir estas actividades en cualquier momento de considerarlo necesario, vislumbrando una centralización de la función electoral y el desdibujamiento del federalismo en la materia.

Jalisco nunca ha estado exento de los efectos del reformismo electoral, representando un caso relevante no sólo por sus factores socio demográficos y económicos, sino también por su historia política, que cuenta con rasgos peculiares desarrollados mediante una etapa de partido hegemónico -por parte del PRI-, posteriormente formando parte de los pioneros en la transición democrática¹⁷ y actualmente con alternancias bipartidistas (Montaño y

¹³ Dicha conceptualización surge a partir de la reforma de 2014, para denominar a los organismos electorales a nivel subnacional del país. Para los fines de este texto, por OPLE se entiende a los organismos públicos electorales de las entidades federativas (Art. 3, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales/ 23 de mayo de 2014).

¹⁴ Esta facultad se presentó en la elección extraordinaria de 2019 en Puebla, tras la muerte de la Gobernadora Martha Erika Alonso.

¹⁵ Esta facultad se vio ejemplificada tras el proceso electoral de 2018 en Chiapas, puesto que el INE ejerció la atracción por motivos de violencia política y paridad de género.

¹⁶ Gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.

¹⁷ Jalisco fue la cuarta entidad del país en tener alternancia en su gubernatura.

Bussoletti, 2020). El sistema político de jalisciense fue cambiando a la par del sistema nacional y de sus homólogos en los otros estados, casi al mismo ritmo y en la misma dirección (Cortés Guardado y Ortiz Barba, 2007), pero particularmente “experimentando transición y alternancia, dos condiciones importantes, no necesarias y suficientes, pero que sí muestran que existe una democracia electoral” (Barrientos del Monte, 2020, p.79).

Particularmente con la reforma de 2014, Jalisco experimentó modificaciones relevantes para su gestión electoral, pues en la medida en que los OPLEs se encuentran sujetos a una autoridad nacional mediante un control más estricto y una menor autonomía se “...demuestran los desafíos de la gobernanza electoral local bajo un marco legal que atribuye decisiones críticas a las autoridades nacionales;” (Amezcu Yépiz, 2020, p.9), pues la mezcla de competencias entre la autoridad nacional y las locales resulta en un complejo proceso de colaboración (Cazarín Martínez, 2016).

El OPLE perteneciente a este estado es el nombrado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC). Dicho instituto, desde 1994, ha sido la autoridad en la materia electoral de la entidad y en consecuencia, un organismo que gestionó modificaciones importantes provenientes de la reforma de 2014, pues su rango de actuación se vio reducido. El modelo del sistema electoral dual en México ocasiona que el organismo electoral central comparta actividades relacionadas con la gestión electoral y cultura cívica con los organismos electorales de las entidades federativas, ambos con carácter de autonomía de los gobiernos tanto locales como el federal.

La reforma electoral de 2014 genera un nuevo sistema para los OPLEs, dado a que estos quedaron en una condición híbrida, puesto que ganaron autonomía frente a los poderes políticos locales, pero quedaron subordinados al INE (Rivera Velázquez, 2020). Los OPLEs son autónomos constitucionalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, se rigen tanto por las leyes locales como por las leyes generales de la materia. A su vez, conservan algunas atribuciones para decidir y ejecutar funciones electorales y administrativas, pero en otras tantas se rigen por acuerdos y lineamientos emanados del INE, además de que sus asignaciones presupuestales están sujetas a lo que dispongan al respecto el Ejecutivo y el Legislativo locales, mientras que la integración de su órgano máximo de dirección está en manos del INE (Rivera Velázquez, 2020).

Con base en ello, se puede observar como los OPLEs se desarrollan bajo un esquema de duplicidad, pues son supervisados a nivel federal por el propio INE en cuanto a su labor, valores y desempeño, mientras que a nivel local -principalmente en el ámbito económico- se encuentra el Congreso de cada entidad.

Voces desde dentro: entrevista semiestructurada a funcionarios vigentes y ex funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC)

Tras lo señalado sobre el nuevo marco que ofreció la reforma del 2014 hacia el IEPC, se llevo a cabo la aplicación de una entrevista semiestructurada¹⁸ dirigida a funcionarios vigentes y ex funcionarios del Instituto, que particularmente hayan sido partícipes del antes y después de la implementación de la reforma, esto para permitir un acercamiento desde dentro, en viva voz de los actores que estuvieron y estan involucrados en este proceso, dentro del período 2012-2018. Los perfiles participantes en esta entrevista resultaron en dos funcionarios vigentes y dos ex funcionarios respectivamente, permitiendo que estas cuatro entrevistas alcanzaran un punto de saturación en cuanto a la información obtenida. Estas personas fueron¹⁹:

- Alvaro Munguía Martínez: laboró en las áreas de Informática, Educación Cívica y Capacitación, Consejeros, Organización y Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero.
- Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora: actual Directora Ejecutiva de Prerrogativas.
- Antonio Elvira de la Torre: laboró como personal operativo, Director de Educación Cívica y Capacitación y posteriormente como representante de un partido político ante el Consejo General.
- Moisés Pérez Vega: actual Consejero Electoral.

En cuanto al cuestionario elaborado para la realización de dichas entrevistas, se optó por la organización a través de los siguientes bloques temáticos: perfil del entrevistado, relación del IEPC con el entorno, reforma electoral de 2014 y análisis FODA hacia los

¹⁸ Aquella que se interesa por cuestionar a administradores, burócratas o miembros de la élite de una comunidad mediante temas o preguntas preestablecidas y sin ejercer un dominio total sobre el informante (Vela, 2013).

¹⁹ El orden de este listado refleja el cómo se fueron elaborando las entrevistas a los actores respectivos.

OPLEs; obteniendo un total de 14 preguntas estructuras para obtener una respuestas de tipo abierta.

Con base en ello, se exponen los siguientes gráficos que pretenden plasmar los resultados obtenidos de la aplicación de las entrevistas ya mencionadas, lo cual se abordará siguiendo los bloques temáticos antes referidos. Es importante mencionar que no sólo se obtuvo un dato por pregunta realizada, sino que en varios casos hay más de un dato obtenido por cuestionamiento. Para conocer los valores dados para la cuantificación de las respuestas, se cuenta con el *Anexo 1. Valores de respuestas obtenidas*, ubicado al final de este texto.

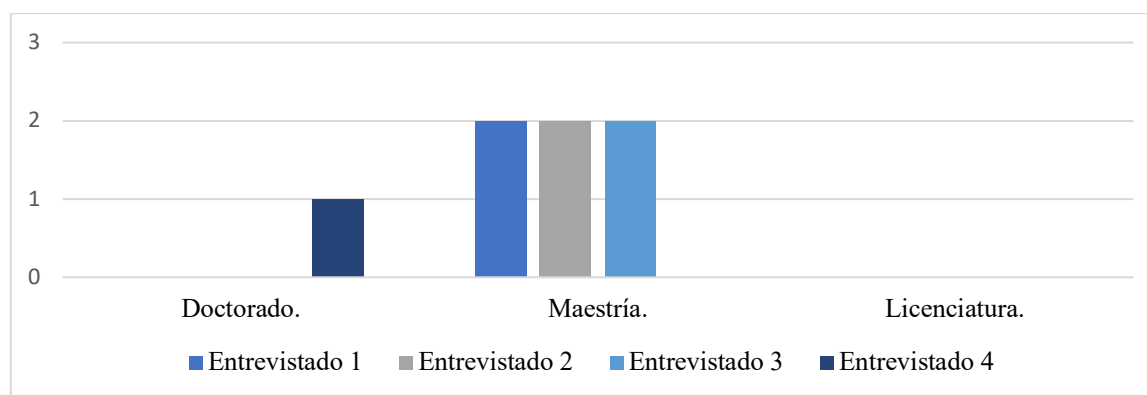
Perfil del entrevistado

En este primer bloque de preguntas derivadas de la aplicación de la entrevista, se puede observar su desarrollo a través de las siguientes preguntas: ¿cuál es su formación académica?, ¿desde cuándo labora/laboró en el IEPC? y ¿qué funciones tiene/tuvo en el IEPC? Tras ello, se visualiza la graficación de las respuesta previamente mencionadas, obteniendo que tres de los entrevistado cuentan con un grado académico de maestría, mientras que sólo uno de ellos con doctorado. Aunado, el área disciplinar de los entrevistados pertenece a las Ciencias Sociales a excepción de uno, perteneciente a la rama del Derecho. Todos han laborado en el IEPC por mas de 15 años, pero actualmente, sólo dos de ellos laboran en el Instituto.

Por último, las áreas dentro del Instituto donde han laborado la mayoría de los entrevistados se encuentran en Consejeros electorales y en la Dirección ejecutiva de participación ciudadana y educación cívica.

Gráfico 1.¿Cuál es su formación académica?

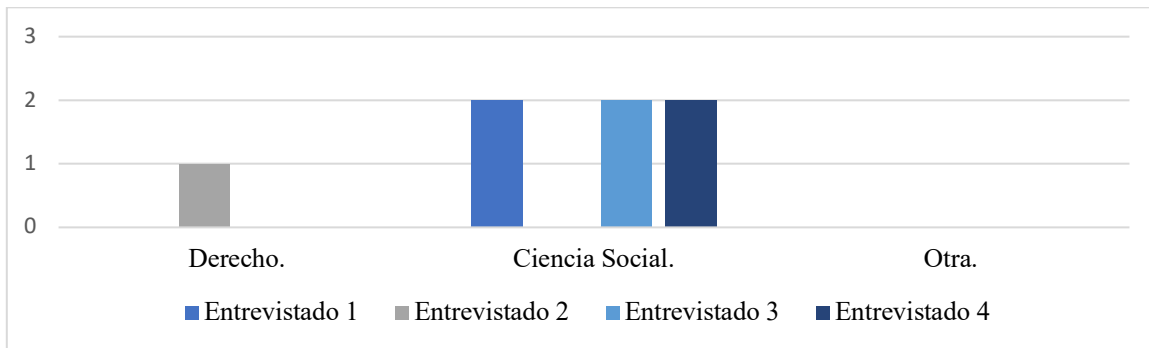
Grado académico.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 2. ¿Cuál es su formación académica?

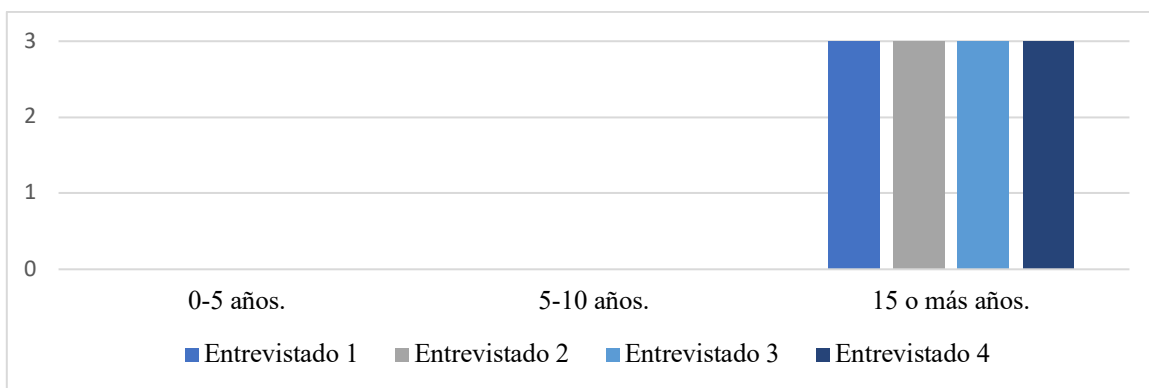
Área disciplinar.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 3. ¿Desde cuándo labora/laboró en el IEPC?

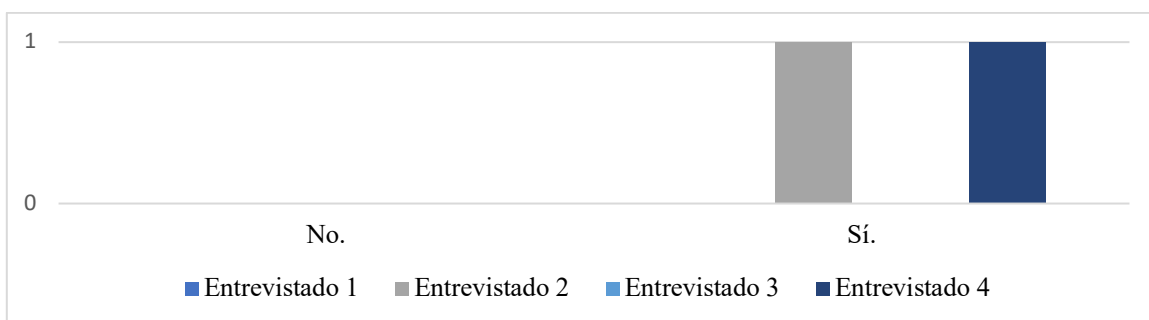
Años trabajados.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

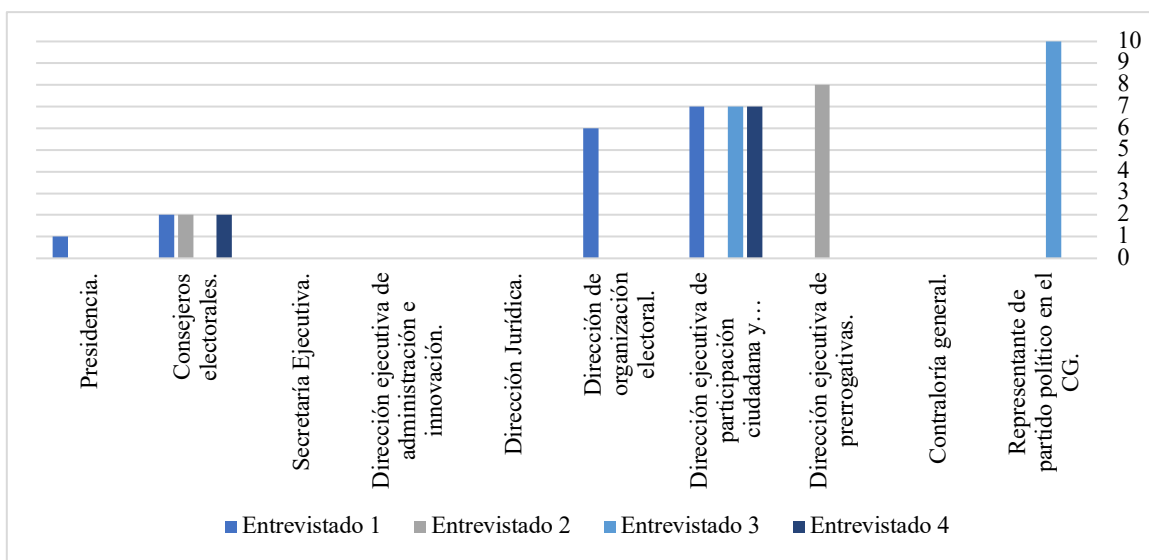
Gráfico 4. ¿Desde cuándo labora/laboró en el IEPC?

Labora actualmente en el IEPC.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 5. ¿Qué funciones tiene/tuvo en el IEPC?



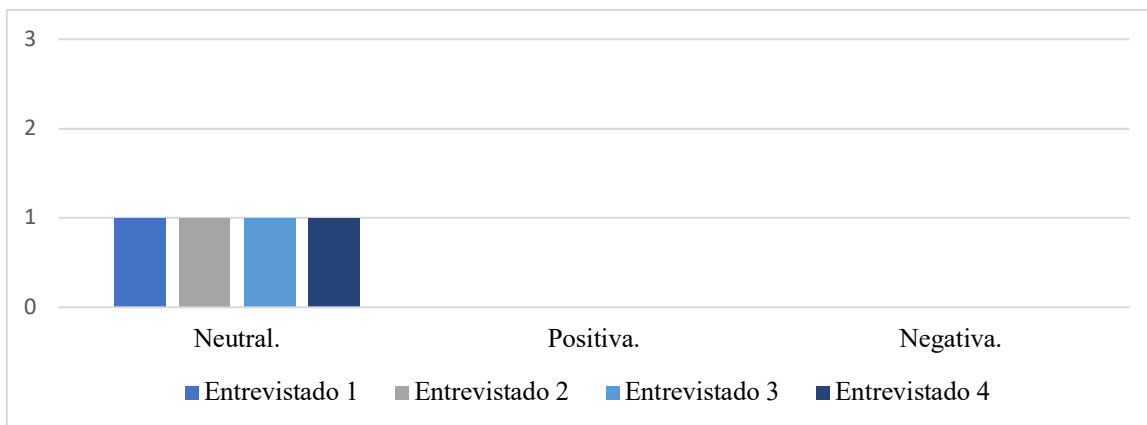
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Relación del IEPC con el entorno

Este bloque encuentra su desarrollo a través de las siguientes preguntas: ¿cómo se relaciona el IEPC con los poderes del Estado?, ¿cómo se relaciona el IEPC con los partidos políticos?, ¿cómo se relaciona el IEPC con el INE? y ¿usted considera al IEPC como actor relevante en la vida política estatal? Los datos obtenidos indican una coincidencia total en cuanto a la relación de carácter neutral que mantiene el IEPC con los poderes del Estado, sin embargo, frente a la relación del Instituto con los partidos políticos, un entrevistado pondera una relación negativa, mientras que los otros tres mantienen la opción de neutralidad. Para la relación del IEPC con el INE se mantiene la posición de tres entrevistados con ponderación neutral, mientras que uno la define como negativa.

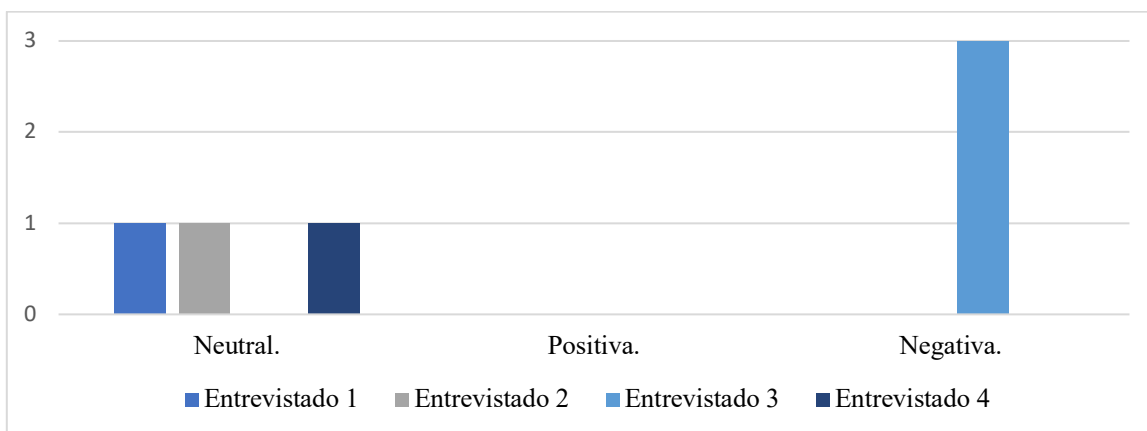
Por otro lado, sólo tres de los entrevistados consideran al IEPC como actor relevante en la vida política estatal, mientras que el entrevistado restante considera lo contrario, por tanto, la mayoría nombran al Instituto como árbitro, mientras que un entrevistado lo describe como un espectador.

Gráfico 6. ¿Cómo se relaciona el IEPC con los poderes del Estado?



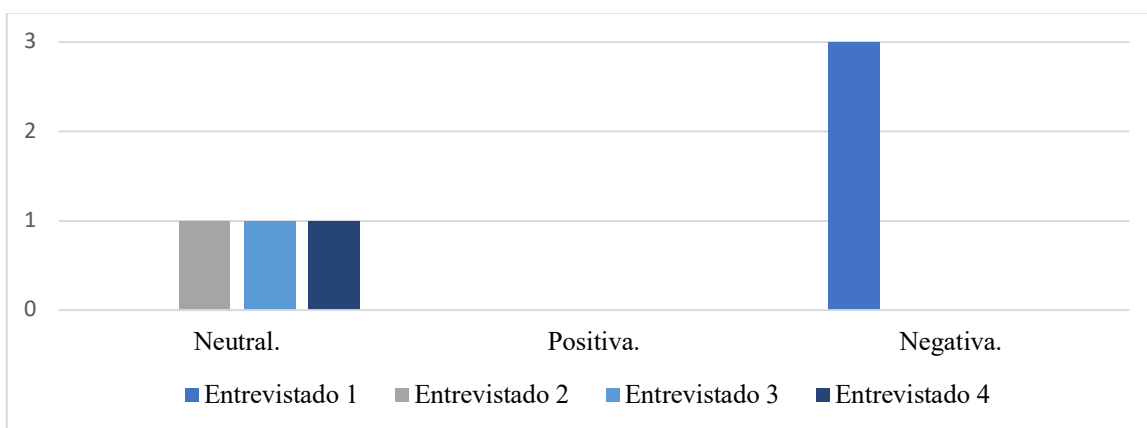
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 7. ¿Cómo se relaciona el IEPC con los partidos políticos?



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

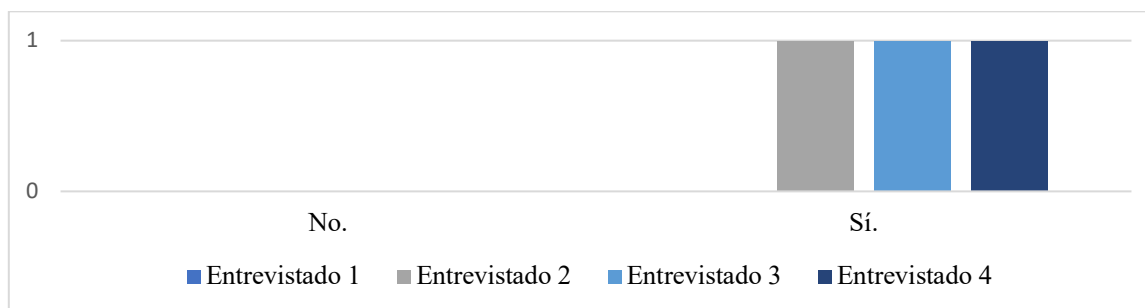
Gráfico 8. ¿Cómo se relaciona el IEPC con el INE?



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 9. ¿Usted considera al IEPC como actor relevante en la vida política estatal?

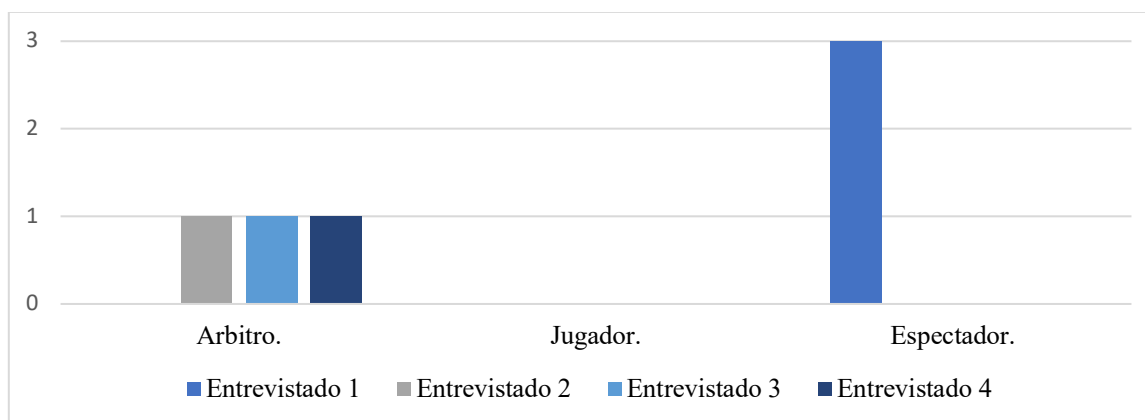
Actor relevante.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 10. ¿Usted considera al IEPC como actor relevante en la vida política estatal?

Tipo de actor.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

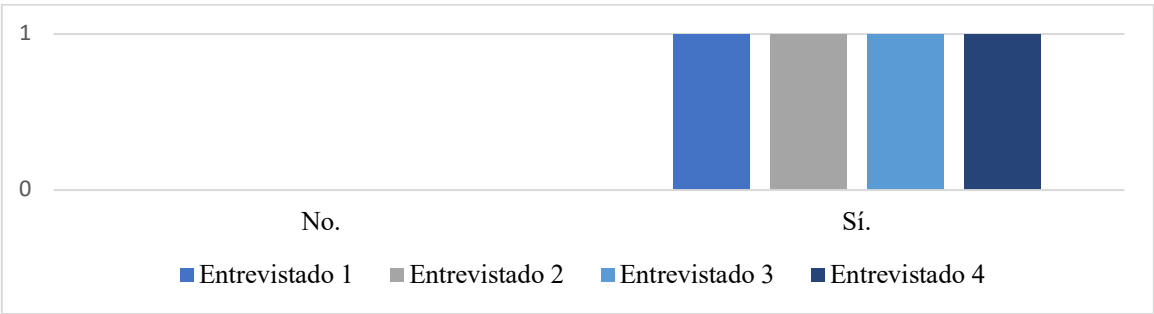
Reforma electoral de 2014

Para este bloque se consideraron las siguientes preguntas: ¿usted, desde su área, considera que hubo una importante transformación con la reforma de 2014? ¿qué cambió? ¿puede mencionar algunos puntos?, ¿qué puede mencionar que cambió en todo el IEPC? y ¿cuál es su balance de los efectos de la reforma de 2014? Las respuestas indican unanimidad en cuanto a que se percibe una transformación importante derivada de la reforma de 2014 en el IEPC. Aunado, se observa que se pondera el contenido de la reforma con un carácter centralizador por parte de tres de los entrevistados, mientras que uno pondera la transformación de los procesos dentro del Instituto.

Además de ello, la mitad de los entrevistados considera que el cambio derivado de la reforma fue negativo, mientras que los otros dos le dan un carácter indeterminado, por lo que en sintonía, la mitad de los entrevistados plantean un retroceso y la otra mitad una caracterización neutral de la reforma. En última instancia, tres entrevistados dan un balance neutral a la reforma de 2014 y sólo uno de ellos le da un balance negativo.

Gráfico 11. ¿Usted, desde su área, considera que hubo una importante transformación con la reforma de 2014? ¿Qué cambió?¿Puede mencionar algunos puntos?

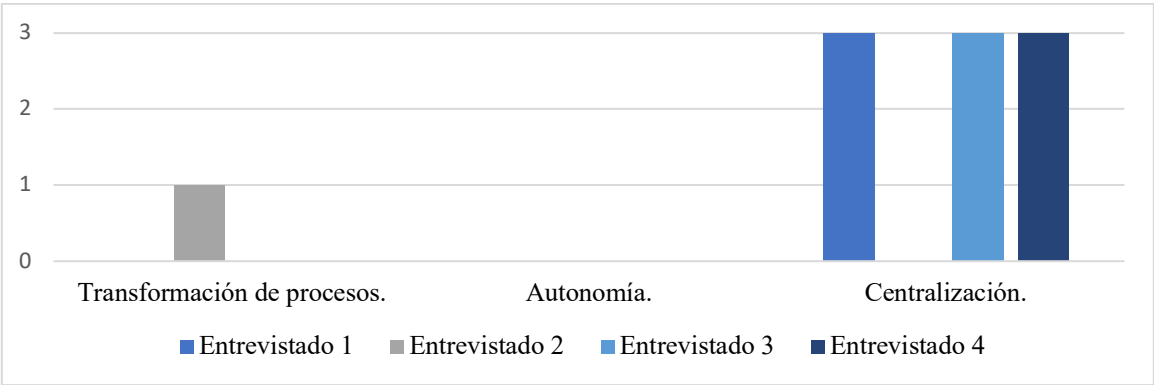
Transformación importante.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 12. ¿Usted, desde su área, considera que hubo una importante transformación con la reforma de 2014? ¿Qué cambió?¿Puede mencionar algunos puntos?

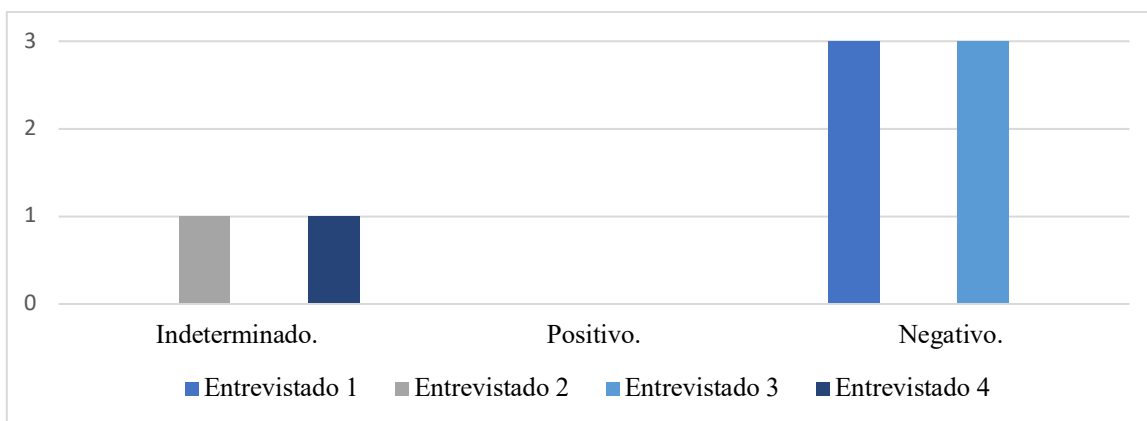
Contenido de la reforma.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

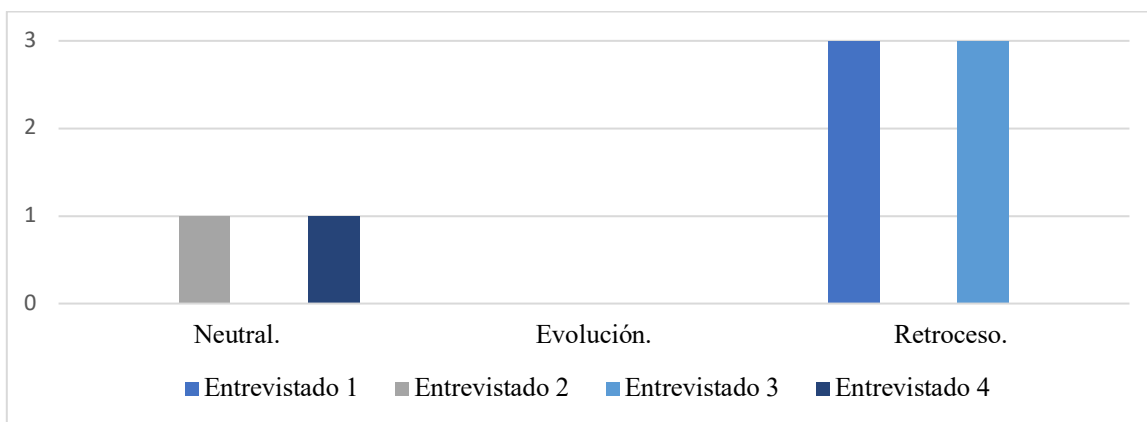
Gráfico 13. ¿Qué puede mencionar que cambió en todo el IEPC?

Tipo de cambio.



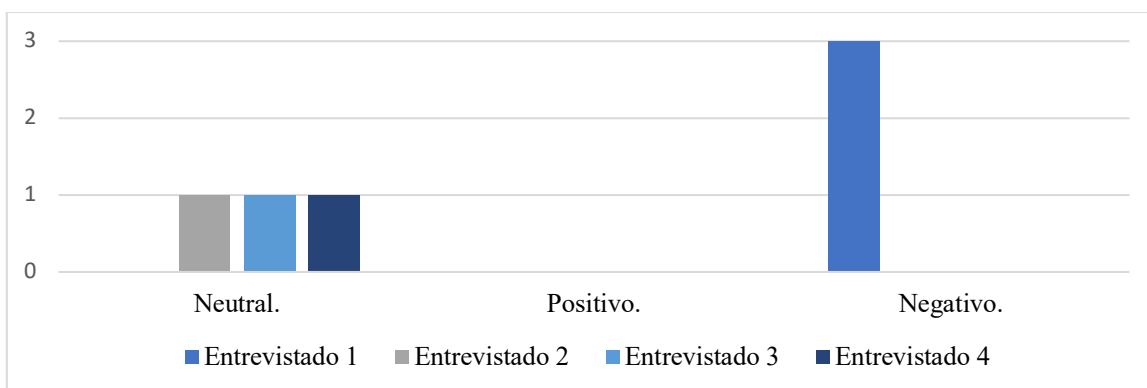
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 14. ¿Qué puede mencionar que cambió en todo el IEPC?
Tipo de cambio específico.



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico 15. ¿Cuál es su balance de los efectos de la reforma de 2014?



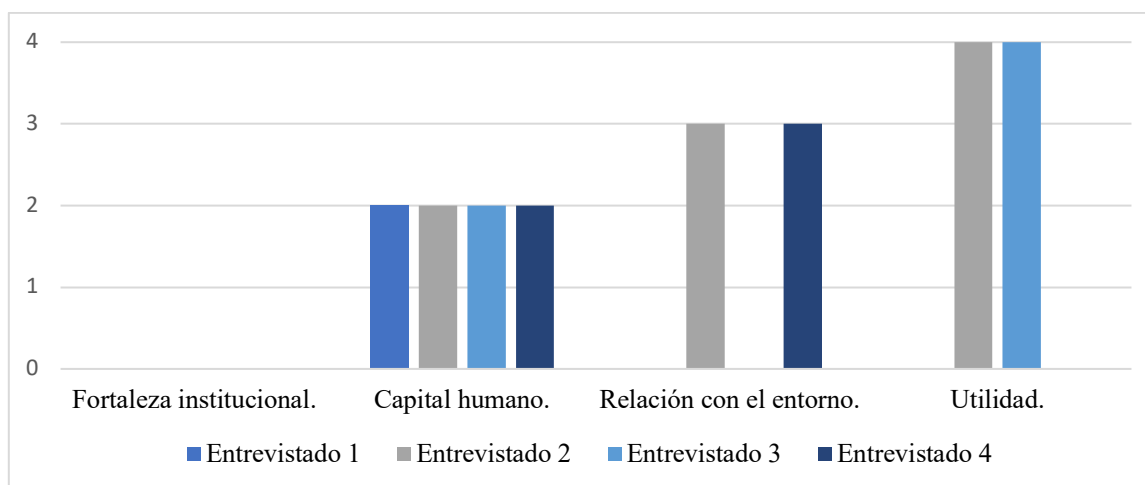
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Análisis FODA hacia los OPLEs

El respectivo bloque temático, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, consta de las siguientes preguntas: ¿qué fortalezas encuentra en los OPLEs?, ¿qué oportunidades tienen los OPLEs?, ¿cuáles son las debilidades de los OPLEs? y ¿cuáles son las amenazas que enfrentan los OPLEs? Cabe mencionar que los entrevistados podían ponderar más de una respuesta, por lo que en el área de fortalezas se considera al capital humano principalmente, seguido de la relación con el entorno y la utilidad.

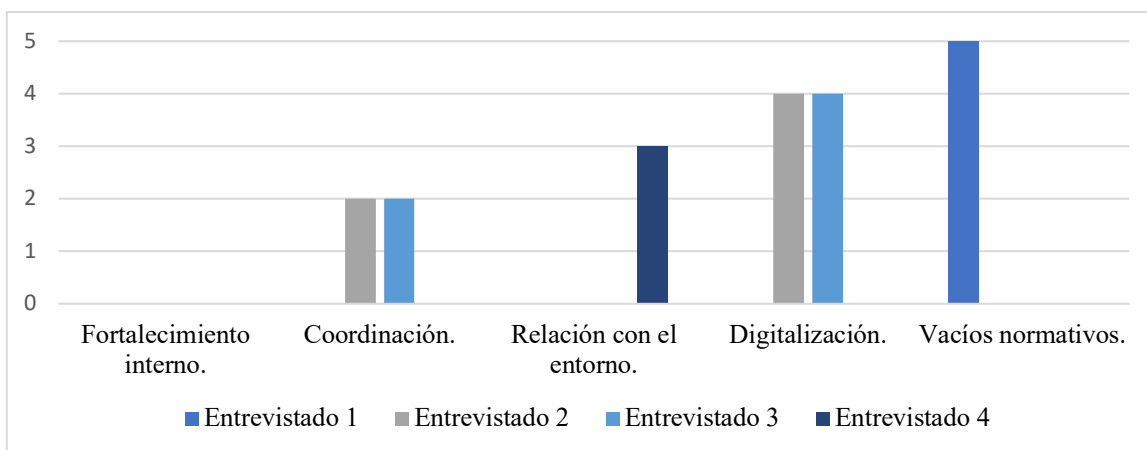
Por otro lado, en cuanto a las oportunidades de los OPLEs, se pondera de igual forma la digitalización y la coordinación, seguido de la relación con el entorno y los vacíos normativos. Para la sección de debilidades se muestra carga en la subordinación a la autoridad electoral nacional y en segundo plano las divisiones internas, la relación con las instituciones políticas y la imagen mediática. En última instancia, las amenazas que se consideran para los OPLEs son, en primera instancia, el hartazgo político y en segundo lugar las amenazas políticas.

Gráfico. 16. ¿Qué fortalezas encuentra en los OPLEs?



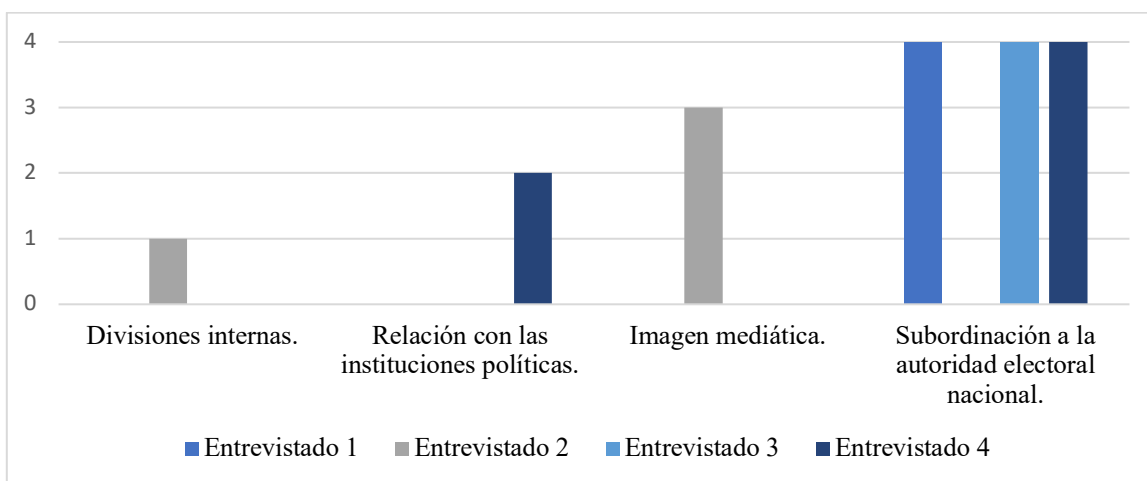
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico. 17. ¿Qué oportunidades tienen en los OPLEs?



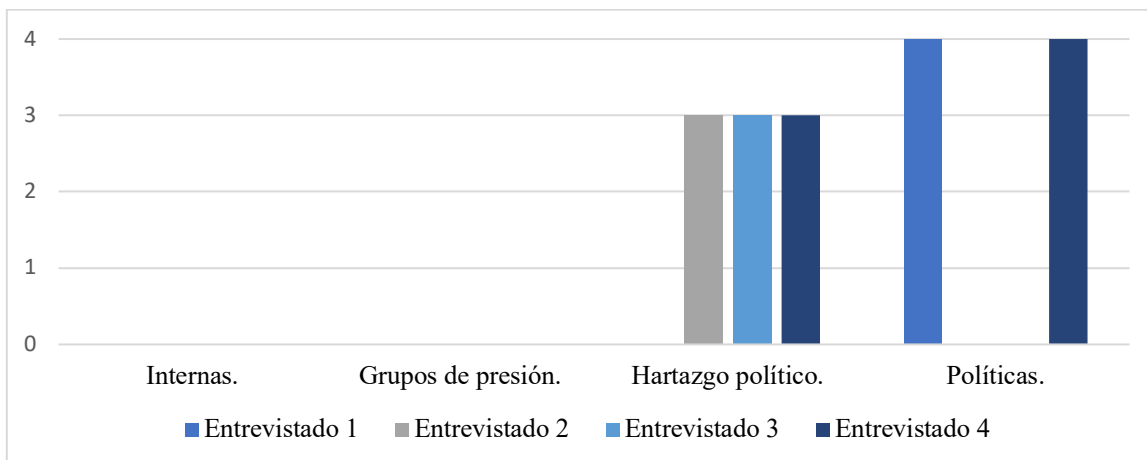
Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico. 18. ¿Cuáles son las debilidades de los OPLEs?



Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Gráfico. 19. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan los OPLEs?



Conclusiones

Tras lo expuesto a lo largo de este texto, el reformismo electoral en México encuentra un bagaje importante que se ha traducido en diversas modificaciones hacia las autoridades electorales nacionales y locales.

Se puede mencionar que, con base en la percepción propia de los funcionarios vigentes y ex funcionarios participantes, se obtuvo una visión interna de los efectos de la reforma de 2014 para el IEPC. Puntualmente, se observa que los perfiles de los entrevistados responden a posgrados a fines de la función electoral, con más de 15 años de labor dentro de dicho Instituto. La mayoría de los entrevistados ponderaron una relación neutral del IEPC con los poderes del Estado de la entidad jalisciense, los partidos políticos nacionales y locales y con el propio INE, considerando al Instituto como un actor relevante de la vida política del estado, nombrándolo como “árbitro”. En cuanto a la reforma de 2014, todos los entrevistados la consideraron como una transformación importante, generalizando su contenido con un papel centralizador en la materia. Sin embargo, la mayoría optó por un balance de carácter neutral frente a esta reforma.

Para el bloque de análisis FODA, las respuestas de los entrevistados marcaron como principal fortaleza de los OPLEs al capital humano y como oportunidad a la digitalización y la coordinación. En cuanto debilidades se destacó la subordinación a la autoridad electoral nacional y como amenaza se ponderó al hartazgo político inserto en la sociedad mexicana. Cabe resaltar que se describe una tendencia en los entrevistados funcionarios vigentes del Instituto en dar respuestas de tinte neutral e indeterminado, mientras que los ex funcionarios mantuvieron una carga negativa constante en las respuestas dadas. Se prevé que los lazos laborales den exiación a esta tendencia.

En suma de lo antes planteado, lo efectos de la reforma electoral de 2014 en el IEPC, desde la visión de los actores antes mencionados, tiene una carga neutral, con ciertos claroscuros, hasta llegar a un espectro con tintes negativos, por lo que se destaca que en ningún momento se consideró una carga positiva hacia este cambio en la legislación electoral, dejando al OPLE jalisciense con una labor sumamente trascendental para la gestión electoral del estado, pero a su vez con una actuación limitada, derivada de la implementación de esta reforma.

Se espera que este texto sea sólo un primer acercamiento para conocer y entender los efectos de la reforma de 2014 en este caso particular, por lo que se recomienda ampliar el abordaje desde una percepción externa de este organismo electoral.

Anexo

Anexo 1. Valores de respuestas obtenidas.

<i>Perfil del entrevistado</i>		
Pregunta	Dato obtenido	Categorías
¿Cuál es su formación académica?	Grado académico.	1=Doctorado. 2=Maestría. 3=Licenciatura.
	Área disciplinar.	1=Derecho. 2=Ciencia social. 3=Otra.
¿Desde cuándo labora/laboró en el IEPC?	Años trabajados.	1=0-5 años. 2=5-10 años. 3=15 o más años.
	Labora actualmente en el IEPC.	0=No. 1=Sí.
¿Qué funciones tiene/tuvo en el IEPC?	Área de trabajo.	1=Presidencia. 2=Consejeros electorales. 3=Secretaría ejecutiva. 4=Dirección ejecutiva de administración e innovación. 5=Dirección jurídica. 6=Dirección de organización electoral. 7=Dirección ejecutiva de participación ciudadana y educación cívica. 8=Dirección ejecutiva de prerrogativas. 9=Contraloría general. 10=Representante de partido político en el CG.
<i>Relación del IEPC con el entorno</i>		
Pregunta	Dato obtenido	Categorías
¿Cómo se relaciona el IEPC con los poderes de Estado?	Tipo de relación.	1=Neutral. 2=Positiva. 3=Negativa
¿Cómo se relaciona el IEPC con los partidos políticos?	Tipo de relación.	1=Neutral. 2=Positiva. 3=Negativa.
¿Cómo se relaciona el IEPC con el INE?	Tipo de relación.	1=Neutral. 2=Positiva. 3=Negativa.
¿Usted considera al IEPC como actor relevante en la vida política estatal?	Actor relevante.	0=No. 1=Sí.
	Tipo de actor.	1=Arbitro. 2=Jugador. 3=Españador.

<i>Reforma electoral de 2014</i>		
Pregunta	Dato obtenido	Categorías
¿Usted, desde su área, considera que hubo una importante transformación con la reforma de 2014? ¿Qué cambió? ¿Puede mencionar algunos puntos?	Transformación importante.	0=No. 1=Sí.
	Contenido de la reforma.	1=Transformación de procesos. 2=Autonomía. 3=Centralización.
¿Qué puede mencionar que cambió en todo el IEPC?	Tipo de cambio.	1=Indeterminado. 2=Positivo. 3=Negativo.
	Tipo de cambio específico.	1=Neutral. 2=Evolución. 3=Retroceso.
¿Cuál es su balance de los efectos de la reforma de 2014?	Balance.	1=Neutral. 2=Positivo. 3=Negativo.
<i>Análisis FODA hacia los OPLEs</i>		
Pregunta	Dato obtenido	Categorías
¿Qué fortalezas encuentra en los OPLEs?	Abanico de fortalezas.	1=Fortaleza institucional. 2=Capital humano. 3=Relación con el entorno. 4=Utilidad.
¿Qué oportunidades tienen los OPLEs?	Abanico de oportunidades.	1=Fortalecimiento interno. 2=Coordinación. 3=Relación con el entorno. 4=Digitalización. 5=Vacíos normativos.
¿Cuáles son las debilidades de los OPLEs?	Abanico de debilidades.	1=Divisiones internas. 2=Relación con las instituciones políticas. 3=Imagen mediática. 4=Subordinación a la autoridad electoral nacional.
¿Cuáles son las amenazas que enfrentan los OPLEs?	Abanico de amenazas.	1=Internas. 2=Grupos de presión. 3=Hartazgo político. 4=Políticas.

Elaboración propia con base en respuesta obtenidas de entrevistas semiestructuradas.

Referencias bibliográficas

Amezcu Yépiz, M. (2020) “Prólogo”. En: Amezcu, Yépiz, M. y Bussoletti, A. Coords. *Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco*. México: Universidad de Guadalajara, pág. 9.

Barceló Rojas, D. A. (2015). “El sistema electoral del federalismo mexicano de ayer y hoy”. En: Carbonell, M. et. al. Coord. *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Tomo IV*. México: UNAM, pág. 213-233.

Barrientos del Monte, F. (2012) “Modelos de Gestión Electoral en América Latina en Perspectiva Comparada”, *FEPADE Difunde*, (23), p. p. 99-114.

Barrientos del Monte, F. (2011) *Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina*. México: INNP.

Barrientos del Monte, F. (2020) “Gobernanza, gestión y confianza en las elecciones en Jalisco”. En: Amezcua, Yépiz, M. y Bussoletti, A. Coords. *Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco*. México: Universidad de Guadalajara, pág.77-100.

Brenes, L. D. (2013) *El rol político del juez electoral*. San José: Tribunal Supremo de Elecciones.

Canal del Congreso (México). (2018) *¿Qué son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)?*. México: Canal del Congreso.
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/11121/Qu_son_los_Organismos_Pblicos_Locales_Electorales_%28OPLE%29

Carmona Dávila, D. (2023) Ley Federal Electoral [en línea]. *Memoria Política de México*. [Consultado el 29 de agosto de 2023]. Disponible en <https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/12/04121951.html>

Cazarín Martínez, A. (2016) “Introducción”. En: Cazarín Martínez, A., Ávila-Eggleton, M. y De la Peña, R. Coords. *México 2015: De la reforma a las elecciones*. México: Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C, pág. 8-12.

Centro de Capacitación Judicial Electoral (México). (2010) *Reformas electorales en México*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/reformas_electorales.pdf

Cortés Guardado, M. A., y Ortiz Barba, I. (2007) “Jalisco: democracia electoral con déficit de legitimidad política”, *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, XIII (38), p. p. 45-80.

García Bartolo, M. S. (2011) “Las reformas electorales a nivel federal en México”, *El Cotidiano*, (166), p. p. 79-91.

Jaramillo, J. F. (1998) “Los órganos electorales supremos”. En: Nohlen, D. et al. Coords. *Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina*. México: Universidad de Heidelberg, TEPJF, IFE y FCE, pág. 371-426.

Krennerich, M. (1998) “Elecciones y contexto político en América Latina”. En: Nohlen, D. et al. Coords. *Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina*. México: Universidad de Heidelberg, TEPJF, IFE y FCE, pág. 39-47.

Langston, J. (2006) “The birth and transformation of the *dedazo* in Mexico”. En: Helmke, G. y Levitsky, S. Edits. *Informal institutions and democracy. Lessons from Latin America*. Baltimore: John Hopkins University Press. pág. 143-159.

Lijphart, A. y Waisman, C. (1996) *Institutional Design in New Democracies. Eastern Europe and Latin America*. Boulder: Westview Press.

López Villafañe, V. (2005) *La Formación del Sistema Político Mexicano*. México: Siglo XXI.

Meixueiro Nájera, G. y Pliego Moreno, I. H. (2010) *Reformas electorales en México: evolución y pendientes*. México: CESOP.

México (2014) “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, *Diario Oficial de la Federación*, 23 de mayo de 2014, pág. 3.

Montaño, M. y Bussioletti, A. (2020) “Comprender lo nacional desde lo local. El proceso electoral 2017-2018 en Jalisco y la calidad de la democracia”. En: Amezcua, Yépiz, M. y

Bussoletti, A. Coords. *Ensayos sobre el sistema político electoral en Jalisco*. México: Universidad de Guadalajara, pág. 13-32.

Morlino, L. (2007) “Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, *Revista de Ciencia Política*, Vol. 27 (2), p.p. 3-22.

Negretto, G. L. (2010) “La Reforma Política en América Latina. Reglas Electorales y Distribución de poder entre Presidente y Congreso”, *Desarrollo Económico*, Vol. 50 (198), p. p. 197-221.

O ’Donnell, G. y Schmitter, P. (1991) “Capítulo 2. Definición de algunos conceptos (y exposición de algunas premisas). En: *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. T. 4*. Buenos Aires: Paidós, pág. 247-250.

Peschard, J. (2008) “La dimensión federal de la democratización electoral”. En : Peschard, J. Coord. *El federalismo electoral en México*. México: H. Cámara de Diputados, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, pág. 19-61.

Rivera Velázquez, J. (2020) “Del federalismo al centralismo electoral: desempeño de los Organismos Públicos Locales después de la reforma constitucional de 2014”. En: Ugalde, L.C y Hernández Quintana, S. Coords. *Elecciones, justicia y democracia en México, Fortalezas y debilidades del sistema electoral, 1990-2020*. México: TEPJF, pág. 81-108.

Romero Ballivián, S. (2017) ”Legislación Electoral”. En: Aquino Rodríguez, J. A. et al. Edits. *Diccionario Electoral Tomo II*. Costa Rica/México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos y TEPJF, pág. 633-637.

Sánchez Maldonado, C. (2022) “Oposición política, movimientos sociales y apertura controlada: la reforma electoral de 1963 en México”, *Revista Historia Autónoma*, (20), p. p. 91-109.

Sartori, G. (2005) *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*. Madrid: Alianza Editorial.

Secretaría de Gobernación (México) (2014) *Reforma Política-Electoral. Explicación Ampliada*. México: Gobierno de la República.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf

Senado de la República (México) (2018) *Gaceta del Senado: Jueves 11 de enero de 2018/ Gaceta: LXIII/ 3PPR-3/ 78170*. México: *Gaceta del Senado*.
[https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/78170#:~:text=1\)%201946%3A%20El%20presidente%20Manuel,partidos%20pol%C3%ADticos%20con%20mayor%20relevancia](https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/78170#:~:text=1)%201946%3A%20El%20presidente%20Manuel,partidos%20pol%C3%ADticos%20con%20mayor%20relevancia)

Sobrado González, L. A. (2008) “Los Organismos Electorales: Autonomía, Formación Electoral y Democracia”, *Revista de Derecho Electoral* (6), p. p.1-20.

Torres, A. F. (2012) “El régimen del partido hegemónico y las reformas electorales en México (1946-1996)” , *Gaceta de Ciencia Política* (9) Número 2, p. p. 107-125.

Vallés, J. y Martí i Puig, S. (2015) “La distribución territorial del poder: Estados Unitarios y Estados Compuestos”. En: Vallés, J. y Martí i Puig, S. *Ciencia Política. Un Manual*. Madrid: Ariel, pág. 173-183.

Vázquez Vázquez, J. M. y Guzmán Robledo, M. T. (2017) “Los organismos electorales: avance y retroceso de la reforma constitucional mexicana de 2014”, *Revista de Investigações Constitucionais*, (4), p. p. 77- 93.

Vela, F. (2013) “Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa”. En: Tarrés, M. Coord. *Observar, escuchar y comprender: Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México: COLMEX y FLACSO México, pág. 63-92.